

COSTA RICA:

RETO SIGLO 21



JORGE WOODBRIDGE GONZÁLEZ



808.56

W873c

(1)

JWG

Woodbridge Gonzalez, Jorge.

Costa Rica: Reto Siglo 21 [Libro digital]:

Tomo 1 / 2024

120 pp. 21 x 19 cm, Ediciones JWG.

ISBN 978-9968-03-856-0

1. ENSAYOS COSTARRICENSES.

2. COSTA RICA - HISTORIA.

Libro de conversaciones - Programa Reto Siglo 21.

Autor: Jorge Woodbridge González

Concepto editorial, asesoría en composición textual,
resumen de entrevistas y edición: Fernando Araya



STUDIO HOTEL
*****Boutique

Agradecimiento especial a Studio Hotel, Santa Ana



Diseño, diagramación y concepto editorial:

Juan Diego Otalvaro Ortega - jd@theroversquest.org
theroversquest.org



Grabación y Filmación de Entrevistas:

Amanda Agüero - framefilmscr@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta obra sin la autorización del autor.

Reservados todos los derechos. Se autoriza la reproducción y difusión de los contenidos de este libro para fines educativos u otros no comerciales, siempre que se reconozcan los créditos de la obra en las citas y referencias.



Reto Siglo 21

Por: Jorge Woodbridge González

NOTA EDITORIAL

Este es el primer libro de la Colección Costa Rica: Reto Siglo XXI, donde Jorge Woodbridge resume e interpreta las ideas principales expresadas por más de seiscientos costarricenses que, en los últimos tres años, sostuvieron conversaciones con él en el marco del programa “Costa Rica: Reto Siglo 21”.

Quienes deseen conocer a los participantes y escuchar esas conversaciones pueden visitar el sitio web www.retosiglo21.org donde también se brinda información sobre esta importante iniciativa de ciudadanos comprometidos con la libertad, la democracia y el desarrollo humano integral.

ÍNDICE GENERAL

06 *Nota Editorial*

12 *Presentación*

14 *Sección Única:
Ensayos*

16

Costa Rica: Una Historia en Tres Etapas

22

Valores y Principios

28

*El Sistema Educativo en Costa Rica:
Entre la Crisis y la Oportunidad*

36

*Universidades Públicas, Impacto Social
y Desafíos en el Siglo XXI*

44

*La Transformación del Sistema Político:
Retos y Oportunidades para la Democracia*

50

*Reforma del Estado para Enfrentar
las Complejidades del Siglo XXI*

56

*La Actividad Agropecuaria:
Realidades y Desafíos*

64

*Los Retos de la Economía
Costarricense en el Siglo XXI*

70

*Empleo Privado en Costa Rica:
Más allá de una Reforma Laboral*

76

Empresas familiares: Trabajo y Éxito

84

*Seguridad Jurídica y Transparencia:
Los Retos de la Política Fiscal Costarricense*

90

*Estado y Sectores Productivos:
Hacia un Estado Facilitador
del Éxito Económico*

98

*La Violencia en la Costa Rica del Siglo XXI:
Nuevas Manifestaciones, Causas y Posibles
Soluciones*

106

*Palabras Finales:
El Futuro*

114

*Glosario
Fotográfico*



*Priorizar la agenda nacional de desarrollo,
basándose en el pluralismo de ideas,
propuestas y experiencias .*



Jorge Woodbridge González



PRESENTACIÓN

En el transcurso de tres años (2021-2024) sostuve conversaciones con más de seiscientos costarricenses, cada uno de ellos experto en los temas abordados. Los ámbitos temáticos cubiertos en esos diálogos fueron los siguientes: obras públicas y construcción; agropecuario y pesca; educación; tecnología e innovación; turismo; valores e inclusión social; salud; cultura y deportes; desarrollo sostenible; comercio exterior e inversión; energía y minas; justicia, seguridad y migración; economía; política; reestructuración del Estado; banca, seguros y pensiones; cooperativas; desarrollo urbano y vivienda; derecho tributario; desarrollo laboral y Pymes; política fiscal; producción; seguridad ciudadana; emprendimiento; historia y democracia.

El propósito de este esfuerzo, denominado “Costa Rica: reto siglo XXI” lo sintetizo de la siguiente manera: realizar un diagnóstico de la situación contemporánea de la sociedad costarricense y, de esa manera, visualizar los desafíos principales del desarrollo humano en Costa Rica e identificar las líneas generales de una política pública que coopere en fortalecer y profundizar el desarrollo económico, social y político del país.

Dado el elevado número de participantes en esta iniciativa decidí resumir e interpretar sus ideas principales en catorce ensayos. Quienes lean el libro tendrán acceso idóneo al pensamiento expresado por los contertulios y, al mismo tiempo, pueden interiorizar una visión de conjunto sobre la condición contemporánea de la sociedad nacional. Como bien se indica en la nota editorial quienes deseen conocer a las personas participantes y escuchar las conversaciones sostenidas, pueden hacerlo en la siguiente dirección electrónica:

www.retosiglo21.org

Los costarricenses, de todas las edades y condiciones socio-económicas, cualesquiera sean sus convicciones y sentires, encontrarán en las páginas siguientes fuentes de inspiración para su quehacer como empresarios, trabajadores, agricultores, comerciantes y profesionales. Aún no hemos llegado al final de la historia patria, los mejores días, los mejores tiempos, aguardan nuestra llegada en el horizonte de la eternidad.

Jorge Woodbridge González

Junio, 2024





SECCIÓN ÚNICA **ENSAYOS**

Costa Rica:
Una Historia en Tres Etapas





*La historia nacional no se detiene, avanza
hacia la culminación y plena madurez.*



Según nos dice Arnaldo Moya, el proceso histórico de Costa Rica puede dividirse en tres etapas. La primera se inició a principios del siglo XIX, cuando la invasión napoleónica a España generó un vacío de poder en América, llenado por gobiernos locales que asumieron su soberanía. En ese marco Costa Rica emprendió su camino hacia la independencia, consolidado en 1821. En esta etapa, se inició la construcción de un Estado y una economía viables, basándose en la instauración de la república democrática, la formación del Estado Nación y la búsqueda de un cultivo de exportación adecuado al mercado mundial.



*Arnaldo Moya,
Historiador*

La segunda etapa se inició con la llegada al poder de don Tomás Guardia, quien promovió un régimen liberal para modernizar el país mediante la eliminación de los lastres coloniales y la promoción del crecimiento económico. Se impulsaron reformas jurídicas, administrativas, fiscales y educativas, que ampliaron los derechos civiles, la participación política y el acceso a la educación. También se fomentó la diversificación económica, al introducir nuevos cultivos como el banano y la caña de azúcar, y al promover la inversión extranjera y la construcción del ferrocarril al Atlántico. Esta etapa concluyó en una crisis político-económica, iniciada con el golpe de Estado de Federico Tinoco, y agravada con la crisis económica de 1929.

La creación de la Universidad de Costa Rica, la promulgación del Código de Trabajo, la fundación del Seguro Social, el capítulo constitucional de las Garantías Sociales, la proscripción del ejército como institución permanente, la nacionalización bancaria y la fundación de la Segunda República, constituyen hechos que fundamental el desarrollo de la Costa Rica moderna y contemporánea.

La tercera etapa se inició con la Guerra Civil de 1948, que enfrentó a los partidarios del candidato oficialista, Rafael Ángel Calderón Guardia y a los del candidato opositor, Otilio Ulate Blanco, tras unas elecciones fraudulentas. La guerra fue ganada por el bando opositor, liderado por José Figueres Ferrer, quien encabezó la Junta de Gobierno. La Junta abolió el ejército, otorgó el sufragio universal, garantizó la libertad de prensa, nacionalizó la banca, impulsó la reforma agraria, fortaleció la educación pública, continuó la Reforma Social que tuvo lugar cuando gobernaba el Dr. Calderón Guardia, y reconoció los derechos de los indígenas y las mujeres.





*Valores
y Principios*



“

*Sin valores y principios éticos no es posible
el desarrollo humano integral.*



En las primeras décadas del siglo XXI, Costa Rica se halla inmersa en una encrucijada de valores que refleja las tensiones inherentes a una sociedad en transición. La crisis de valores que enfrenta no es simplemente un declive moral, sino más bien un síntoma de una transformación más profunda y compleja, una reevaluación de los principios que han guiado a la nación a través de su historia. Esta crisis se manifiesta en múltiples facetas de la vida costarricense, desde la política hasta la vida cotidiana, y sus repercusiones son tanto visibles en el ámbito público como en el privado.

Desde una perspectiva conservadora, la crisis actual puede interpretarse como una desviación de los valores tradicionales que han sostenido la estructura social costarricense. Estos valores, profundamente arraigados en la familia, la religión y el sentido de comunidad, han proporcionado un marco ético estable a través del cual la sociedad ha prosperado. La familia, considerada la célula básica de la sociedad, ha sido el pilar sobre el cual se han edificado las relaciones sociales, y la religión ha ofrecido un sentido de propósito y pertenencia que ha unido a las comunidades. Sin embargo, la incursión de la modernidad globalizada ha traído consigo nuevas ideas y prácticas que desafían este marco tradicional, introduciendo una pluralidad de visiones del mundo que compiten por la preeminencia.

La globalización y la posmodernidad han promovido una relativización de las ideas, erosionando la certeza de los valores absolutos y tradicionales. Para la juventud costarricense, este fenómeno ha resultado en una incertidumbre que afecta profundamente su bienestar psicológico y social. La falta de puntos de referencia fijos ha creado un vacío que, en algunos casos, se manifiesta en formas destructivas de comportamiento, como las adicciones y la violencia. Estos jóvenes, que crecen en un mundo cada vez más interconectado y diverso, buscan su lugar en una sociedad que parece estar en constante cambio y donde las certezas del pasado ya no parecen aplicar.



La familia personaliza, socializa, humaniza. Es una escuela de libertad, de intimidad, y de apertura. La familia es la afirmación de todo lo humano.

*Helena Fonseca Ospina,
Empresaria*

Por otro lado, los adultos mayores enfrentan la disolución de un mundo de certezas y valores universales. La rápida transformación cultural, alimentada por la globalización y los movimientos sociales contemporáneos, ha dejado a muchos sintiéndose desorientados y desconectados de las nuevas generaciones. La visibilización de posturas ultraconservadoras es una respuesta a este cambio, un intento de aferrarse a un pasado percibido como más estable y seguro, donde los roles sociales y las expectativas eran claras y compartidas por la mayoría.

La crisis de valores en Costa Rica también se refleja en el ámbito político, donde se observa una polarización creciente. Los debates sobre temas como los derechos humanos, el medio ambiente y la economía se han vuelto cada vez más intensos y divididos.

La política costarricense, históricamente caracterizada por su estabilidad y moderación, ahora se ve sacudida por corrientes ideológicas que buscan redefinir el rumbo del país. Esta polarización no solo afecta la gobernabilidad, sino que también se refleja en la vida cotidiana de los ciudadanos, quienes se encuentran divididos entre diferentes visiones de lo que significa ser costarricense en el siglo XXI. La tecnología y las redes sociales han jugado un papel crucial en esta transformación de valores. La información y las ideas fluyen con una rapidez sin precedentes, permitiendo que las personas estén expuestas a una diversidad

de perspectivas y culturas. Sin embargo, esto también ha llevado a la formación de cámaras de eco donde las opiniones se refuerzan mutuamente, limitando la exposición a puntos de vista alternativos y, en algunos casos, exacerbando la polarización.

Tal proceso, si bien presenta desafíos significativos, también abre la puerta a oportunidades únicas para redefinir y fortalecer el tejido ético de la nación. El conservadurismo costarricense, tradicionalmente centrado en la preservación de la familia, la fe y las tradiciones culturales, se encuentra en un punto de inflexión. La globalización ha traído consigo una diversidad de perspectivas y prácticas que desafían las normas establecidas, pero también ofrece la posibilidad de un diálogo

enriquecedor y la oportunidad de integrar lo mejor de ambos mundos. Es

esencial que el conservadurismo no se perciba como una resistencia al cambio, sino como una voz que aboga por una integración reflexiva y consciente de los valores tradicionales en el nuevo contexto social.

Los valores son, por naturaleza, dinámicos; cambian y evolucionan junto con la sociedad. En el contexto de la globalización y la posmodernidad, la reinterpretación de los valores tradicionales es no solo inevitable sino también necesaria. La juventud costarricense, equipada con acceso a información global y una perspectiva más amplia, está redefiniendo

La Ética del Desarrollo es uno de los pilares irrenunciables del crecimiento económico, el bienestar social y la estabilidad política.

lo que significa adherirse a estos valores en el siglo XXI. La tarea para los conservadores es guiar este proceso de reinterpretación, asegurando que los valores fundamentales se mantengan, pero se adapten a las realidades contemporáneas y a las necesidades de una sociedad en evolución. La posmodernidad, con su rechazo a las grandes narrativas y su aceptación de la pluralidad, ha tenido un impacto significativo en la sociedad costarricense. Ha desafiado la noción de valores universales y ha promovido un enfoque más individualizado de la ética. Sin embargo, esto no tiene por qué ser una amenaza para los valores tradicionales. Al contrario, puede ser una oportunidad para que estos valores demuestren su resiliencia y su capacidad para proporcionar orientación en un mundo complejo y multifacético.

En esta de transformación, es crucial reconocer que el conservadurismo y el cambio no son mutuamente excluyentes. Pueden coexistir y, de hecho, pueden fortalecerse mutuamente. El conservadurismo puede ofrecer un ancla en las tradiciones y en los valores que han demostrado su valor a lo largo del tiempo, mientras que el cambio puede proporcionar la flexibilidad y la adaptabilidad necesarias para navegar en un mundo en constante evolución. La clave está en encontrar un equilibrio entre la preservación de los valores que definen la identidad costarricense y la apertura a nuevas ideas que puedan enriquecer y revitalizar la cultura nacional. Este equilibrio permitirá a Costa Rica mantener su singularidad mientras

participa activamente en el diálogo global. En última instancia, la crisis de valores en Costa Rica es una invitación a un diálogo constructivo sobre el futuro ético de la nación. Un diálogo que debe ser inclusivo, que considere todas las voces y perspectivas, y que busque construir un consenso sobre los valores que guiarán a la sociedad hacia adelante. Este diálogo es esencial para forjar una sociedad que no solo sobreviva a los desafíos del presente, sino que también prospere en el futuro, manteniendo un equilibrio entre la tradición y la innovación, entre la certeza y la flexibilidad, y entre la identidad local y la ciudadanía global.

***El Sistema Educativo en Costa Rica:
Entre la Crisis y la Oportunidad***



“

La educación, sea pública, privada o mixta, es uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano integral.

La construcción del futuro pasa necesariamente por la calidad, excelencia y eficiencia del sistema educativo.



Desde la segunda mitad del siglo XX, la educación ha jugado un papel fundamental en el tejido socioeconómico de Costa Rica, transformándose en un motor indiscutible de progreso y modernización. Este fenómeno no solo catalizó la transformación de las estructuras productivas del país, sino que también se erigió como el principal mecanismo de movilidad social, permitiendo a vastos sectores de la población acceder a oportunidades económicas previamente inalcanzables. La inversión en capital humano, reflejada en la expansión de la oferta educativa y la mejora en la calidad de la enseñanza, se tradujo en la emergencia de una clase media sólida y diversificada, capaz de impulsar la innovación y sostener el dinamismo económico. La democratización de la educación, caracterizada por una política de acceso universal y gratuito, no solo promovió la equidad social sino que también fomentó la formación de ciudadanos con una conciencia crítica y participativa, esenciales para el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país. La correlación entre educación y desarrollo se manifestó en múltiples dimensiones, incluyendo la reducción de la pobreza, la mejora en la distribución del ingreso y el incremento en la competitividad nacional en el ámbito mundial.

Durante décadas, el sistema educativo público de Costa Rica fue emblema de orgullo y un distintivo de la singularidad nacional en un contexto regional marcado por el conflicto y el subdesarrollo. No obstante, una serie de eventos y procesos históricos han revelado y exacerbado sus deficiencias en el siglo XXI. La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto las barreras hacia la digitalización de la educación, evidenciadas por la conectividad insuficiente de instituciones y la falta de preparación del personal para transitar hacia la educación virtual. Estos desafíos, sin embargo, son síntomas de una problemática más arraigada, que se remonta a la erosión del Estado de Bienestar. Los sucesivos gobiernos han demostrado una incapacidad para atender las necesidades fundamentales de los centros educativos, relegando responsabilidades a comités compuestos mayormente por padres de familia sin la experiencia necesaria en gestión pública, lo que ha conducido a una gestión ineficaz de los recursos. Esta situación ha relegado al director, cuyo rol debería ser central en la esfera académica, a un segundo plano dominado por tareas administrativas, limitando gravemente su capacidad de actuar como un agente transformador. Los problemas que aquejan al sector educativo son tan numerosos y complejos que resulta arduo enumerarlos, pero sus consecuencias son palpables: deficiencias significativas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

La crisis educativa en Costa Rica trasciende las deficiencias fundamentales en habilidades de redacción, comprensión lectora y cálculo

matemático; se extiende a una marcada insuficiencia en la formación tecnológica. Esta laguna en el conocimiento no es un mero vacío curricular, sino que representa un lastre significativo para la competitividad nacional en un escenario internacional cada vez más dominado por la innovación y la tecnología avanzada. La brecha digital, exacerbada por un aprendizaje tecnológico deficiente, no solo limita las oportunidades individuales de los estudiantes, sino que también compromete la capacidad del país para posicionarse como un actor relevante en la economía del conocimiento. El rezago en la educación tecnológica es un reflejo de un sistema que no ha logrado adaptarse a la rapidez con la que evolucionan las demandas del mercado laboral global. La falta de una infraestructura educativa que promueva el pensamiento crítico y la resolución de problemas a través de la tecnología, sumado a un currículo que no responde a las necesidades del siglo XXI, pone en evidencia la urgencia de una reforma educativa integral. La transformación del paradigma educativo debe ser una prioridad estratégica para el gobierno y la sociedad civil, con el fin de cerrar la brecha digital y potenciar el desarrollo humano.

La educación fue una de las creaciones previsoras más importantes en el siglo XIX, desde entonces los costarricenses la han priorizado en sus esfuerzos de modernización, libertad y justicia. Ahora, en el siglo XXI, ha llegado el momento de una gran reforma educativa basada en el conocimiento, la información, la ciencia, la tecnología y la ética del desarrollo

La posibilidad de una reforma sustancial en el sistema educativo costarricense es un asunto que suscita intensos debates. El Ministerio de Educación Pública, siendo una de las entidades más grandes de Centroamérica con aproximadamente 100 mil empleados, se encuentra en una posición compleja. Los sindicatos, con su marcada combatividad, se imponen como defensores del status quo, lo que añade una capa adicional de complejidad a cualquier intento de cambio sistémico. La rigidez estructural que caracteriza al Estado costarricense se refleja en la gestión del sistema educativo, donde las reformas tienden a ser incrementales y de alcance limitado. La experiencia de Estonia, que ha logrado una transformación educativa notable, sirve como un modelo aspiracional que implica una reestructuración profunda del aparato estatal y una redefinición del papel del sector público en la sociedad.

Para Costa Rica, esto significaría no solo una revisión de las políticas y prácticas actuales, sino también un cambio paradigmático en la cultura organizacional y administrativa. La inercia institucional y la resistencia al cambio son obstáculos significativos que requieren una voluntad política firme y una visión estratégica a largo plazo.

Este es un problema que tiene que ver con la condición social del costarricense, porque quien se eduque bien tendrá acceso a buenos trabajos, pero quién no se educa lo suficiente engrosará las huestes de desempleados y subempleados. Vivimos en la Costa Rica a dos velocidades, la de los que se han preparado bien y la de los que no se han preparado, y eso afectará el desarrollo del país.

La interrogante sobre si una reforma del sistema educativo costarricense sería suficiente para resolver sus problemas es, en efecto, una cuestión de gran profundidad y complejidad. Las voces que abogan por una revolución educativa argumentan que el modelo actual, un producto de la modernidad y las ideas ilustradas del siglo XVIII, se ha vuelto obsoleto en la era posmoderna, caracterizada por la fluidez y la reconfiguración constante de conceptos y valores.



*Francisco Antonio Pacheco,
Ex – Ministro de Educación
Pública y Ex – Presidente
de la Asamblea Legislativa*

La crisis del sistema educativo en Costa Rica, según esta perspectiva, no se debe únicamente a la incapacidad estatal de adaptarse a nuevos contextos, sino a que el modelo educativo “fabril” ha llegado a su límite frente a los desafíos de la globalización y el cambio tecnológico acelerado. Frente a esta situación, se plantea la necesidad de un diálogo multisectorial que involucre a actores políticos y privados, con el objetivo de reconstruir el sistema educativo desde sus cimientos. Este enfoque radical sugiere que no basta con aplicar soluciones temporales o “parches” a los problemas existentes; se requiere una reinvencción completa que responda no solo a las demandas actuales, sino que también sea capaz de anticiparse y adaptarse a los retos futuros. La propuesta de un diálogo inclusivo y participativo busca crear un sistema educativo que sea relevante, resiliente y preparado para un mundo en constante evolución, asegurando que la educación en Costa Rica sea un pilar sólido para el desarrollo individual y colectivo en el siglo XXI.



*Universidades Públicas,
Impacto Social
y Desafíos en el Siglo XXI*





*Académicos, administrativos, estudiantes,
son los pilares de la educación superior
pública y privada. En Costa Rica existe
un Sistema Nacional Mixto de Educación
Superior.*



Las universidades públicas de Costa Rica emergieron como fruto de las reformas sociales de los años cuarenta, cuando se fundó la Universidad de Costa Rica. En un panorama donde la escasez de profesionales era casi absoluta, estas instituciones se convirtieron en catalizadores de la modernización tanto del sector público como del privado a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Su contribución fue decisiva en la reconfiguración del mercado laboral, facilitando una mayor participación femenina en la economía y propiciando el crecimiento de una clase media profesional y educada. La transformación impulsada por la educación superior pública no solo se reflejó en la creación de capital humano cualificado, sino también en la promoción de valores democráticos y en el fortalecimiento de la cohesión social. La influencia de estas instituciones ha trascendido las aulas, incidiendo en la cultura, la política y la identidad nacional. La universidad pública, por ende, no es solo un espacio de formación académica, sino un pilar de la identidad costarricense y un agente de cambio y progreso en la sociedad.

Y a partir de los años setenta su influencia se ha co-relacionado con el importante y positivo impacto de la educación superior privada, hasta el punto de poder hablarse, en la actualidad, de un Sistema Nacional Mixto de Educación Superior.

La educación superior costarricense ha evolucionado hacia la creación de un Sistema Nacional de Educación Superior, donde tanto las universidades públicas como las privadas deben cooperar para elevar la calidad general de la enseñanza universitaria, su cobertura social y su impacto en el diseño y ejecución de las políticas sociales y económicas del país.

Las universidades públicas de Costa Rica enfrentan en el siglo XXI una encrucijada de desafíos.

La evolución de la sociedad costarricense y las demandas de un mercado laboral en constante cambio han expuesto limitaciones estructurales y contradicciones internas en estas instituciones. Entre los principales desafíos se encuentran la necesidad de adaptar los planes de estudio a las competencias digitales y tecnológicas requeridas en la actualidad, la urgencia de fomentar la investigación y la innovación frente a presupuestos limitados, y la presión por mantener la calidad educativa en un entorno de masificación estudiantil. Además, las universidades deben navegar la tensión entre preservar su autonomía y responder a las expectativas de rendición de cuentas y transparencia en relación con la gestión eficaz de los recursos económicos otorgados a ellas por el Estado. La gestión administrativa se ha vuelto un campo de batalla donde la eficiencia y la burocracia luchan por prevalecer, mientras la inclusión y la equidad educativa se ven amenazadas por disparidades socioeconómicas persistentes y profundas.

En este contexto, las universidades públicas están llamadas a reinventarse, deben convertirse en generadores de soluciones y en espacios de debate crítico y reflexión profunda. La respuesta a estos desafíos no solo definirá el futuro de la educación superior en Costa Rica, sino también contribuirá a la construcción de una mejor sociedad en el futuro. La tarea es monumental, pero indispensable para asegurar que las universidades continúen siendo un faro de sabiduría y un motor de desarrollo en la era de la información y la globalización.

La enseñanza superior en Costa Rica, en su rol primordial de formar profesionales alineados con las demandas del mercado laboral, enfrenta el desafío de actualizarse ante las tendencias globales. El avance tecnológico constituye el eje central de las economías tanto establecidas como emergentes, y exige una inversión decidida en la formación de especialistas en áreas tecnológicas y científicas. La adaptación ágil de los programas de estudio es imperativa para mantener el paso con los cambios acelerados de nuestro tiempo. Sin embargo, las universidades costarricenses parecen desfasadas en este cometido, enfocando recursos considerables en disciplinas como las humanidades, muy valiosas, sin duda, pero no responden con la misma inmediatez a las necesidades de los sectores productivos, de los empresarios y de los trabajadores. Esta discrepancia entre la oferta académica y las exigencias de la vida social y económica no solo compromete la responsabilidad de las instituciones educativas con la economía nacional, también coloca a los graduados en

una posición precaria frente a un entorno laboral cada vez más competitivo.

Las universidades públicas deben generar espacios para la innovación y el emprendedurismo, para acrecentar el impacto que debe tener en la sociedad Costarricense el conocimiento generado por la Academia.

Gustavo Gutierrez Espeleta,
Educador, Rector de la
Universidad de Costa Rica



La responsabilidad de las universidades públicas costarricenses trasciende la formación de profesionales; se extiende a la creación y difusión de conocimiento innovador capaz de ser aprovechado por la sociedad. Si bien las universidades nacionales cuentan con una variedad de programas de investigación y medios para la diseminación del saber, se hace imperativo fortalecer la sinergia entre el ámbito académico y los sectores productivos. Esta integración es crucial para lograr una interacción adecuada de lo académico con la revolución científica y tecnológica, y las dinámicas de los mercados laborales. La colaboración entre universidades y empresas debe ser una vía de doble sentido, donde la academia aporte su capacidad de investigación y pensamiento crítico, y el sector productivo ofrezca su visión pragmática y experiencia en

la implementación. Juntos, pueden generar un ecosistema de innovación capaz de responder a las necesidades actuales, y de anticipar los desafíos del futuro. Para lograr este objetivo, es esencial para las universidades abrir una mayor colaboración interdisciplinaria e involucrarse con los actores económicos, entendiendo el significado positivo de trascender más allá de las aulas y laboratorios. Deben convertirse en incubadoras de soluciones prácticas y sostenibles a los desafíos del desarrollo, y de ese modo enriquecer tanto el tejido intelectual como el productivo de Costa Rica.





***La Transformación del Sistema Político
en Costa Rica:
Retos y Oportunidades para la
Democracia en el Siglo XXI***



“

*...[Costa Rica] uno de los lugares tocados
por ese mar donde brilla la esperanza.
Aquí, un pueblo constante y valiente ha
establecido una democracia progresiva,
que sirve de ejemplo al hemisferio...*

John F. Kennedy,
Marzo, 1963



El sistema político de Costa Rica ha experimentado una transformación significativa, marcada por la transición de un escenario dominado por la hegemonía de dos partidos políticos a un entorno más competitivo y diversificado. Esta evolución refleja una respuesta directa a la crisis de legitimidad que han enfrentado los partidos tradicionales, cuya influencia se ha visto mermada por escándalos de corrupción y una percepción general de inmovilismo político. La ciudadanía costarricense, en su búsqueda de alternativas, ha demostrado una actitud proactiva y decidida, retirando su apoyo a los partidos establecidos y orientándose hacia opciones que prometen renovación y cambio. Este dinamismo electoral es un claro indicativo de la madurez política de la sociedad, que no se conforma con la continuidad de prácticas desgastadas y busca activamente la transformación de su entorno político.

Sin embargo, dicho proceso, si bien refleja un cambio en la dinámica política, no necesariamente se traduce en una evolución positiva del sistema electoral. Por el contrario, representa un conjunto de desafíos y problemáticas que pueden comprometer la eficacia y la gobernabilidad del país.

La fragmentación del sistema partidista, ha generado una complejidad significativa en la formación de mayorías legislativas. Esta situación afecta directamente la capacidad del gobierno para implementar políticas públicas coherentes y efectivas. La dificultad para alcanzar consensos estables puede llevar a un estancamiento legislativo, donde las leyes y reformas necesarias para el desarrollo del país

se ven obstaculizadas por la falta de acuerdos. Además, la proliferación de partidos políticos, muchos de los cuales tienen bases locales o cantonales y carecen de una ideología definida, contribuye a una representación política dispersa. Esto puede resultar en una legislatura fragmentada, donde los intereses particulares prevalecen sobre el bien común, y la toma de decisiones se vuelve ineficaz y descoordinada.

El Estado Constitucional de Derecho, basado en el régimen de libertades y en la promoción permanente de los derechos humanos, constituye uno de los mayores logros en la evolución costarricense. En el siglo XXI, para enriquecer y fortalecer esa senda de desarrollo en democracia, es esencial que el sistema político se modernice promoviendo su calidad y eficacia.

La proliferación de partidos con bases ideológicas ambiguas o en constante cambio plantea interrogantes sobre la coherencia y la convicción de sus plataformas políticas. El surgimiento de partidos que se centran en intereses locales o cantonales, o que se forman alrededor de figuras carismáticas sin una ideología clara, puede resultar en una legislatura donde las alianzas políticas son efímeras y basadas en conveniencias del momento, en lugar de en principios compartidos. Esto puede debilitar la cohesión y la dirección estratégica del gobierno, ya que las coaliciones formadas bajo estas circunstancias son a menudo inestables y propensas a disolverse ante los primeros signos de desacuerdo.

El debate se intensifica al considerar que la falta de una identidad ideológica firme en los partidos emergentes puede conducir a una política de cortoplacismo, donde las decisiones se toman en función de ganancias inmediatas en lugar de una visión a largo plazo. Esta situación puede afectar la implementación de políticas públicas consistentes y el desarrollo de estrategias sostenibles para el país.

La necesidad de un marco regulatorio se hace cada vez más evidente. Este marco debe ser diseñado de tal manera que fomente la inclusión política sin sacrificar la claridad ideológica y la responsabilidad electoral.

La consolidación de partidos políticos con ideologías bien definidas y estructuras organizativas sólidas es esencial para asegurar una representación efectiva y una gobernabilidad estable. Estos elementos son cruciales para que el sistema político pueda responder de manera adecuada a las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía. Una institucionalidad electoral robusto y bien pensado puede proporcionar el equilibrio

necesario entre la libertad de asociación política y la necesidad de mantener un sistema político coherente y funcional. Al establecer criterios claros para la formación y operación de partidos políticos, se puede garantizar que estos actúen

como verdaderos vehículos de las ideologías y deseos del electorado, y no simplemente como plataformas para intereses individuales o de grupo. La claridad ideológica es fundamental para que los votantes puedan tomar decisiones informadas en las urnas.

Necesitamos una mayor representatividad en la Asamblea Legislativa amparada por el Código Electoral. Es una necesidad hoy en día y, desgraciadamente, los partidos políticos son la única puerta para abrir esos espacios. La Costa Rica que tenemos es diversa y demanda esos espacios garantizados por la institucionalidad nacional.



*Gustavo Araya Martínez,
Politólogo, analista del
acontecer nacional*

Cuando los partidos políticos presentan plataformas bien articuladas y consistentes con sus valores declarados, los ciudadanos pueden alinear sus propias creencias y expectativas con el partido que mejor represente sus intereses. Esto también promueve un debate político más sustantivo y centrado en políticas, en lugar de en personalidades o promesas vacías. La responsabilidad electoral, por otro lado, asegura que los partidos políticos y sus candidatos rindan cuentas ante sus electores. Esto no solo incluye el período previo a las elecciones, sino también el cumplimiento de promesas y la gestión efectiva una vez en el cargo. Un partido político con una estructura organizativa sólida y una ideología clara es

más probable que mantenga su integridad y coherencia a lo largo del tiempo, lo que a su vez contribuye a una democracia más estable y predecible.

Aparte de la legitimidad, la financiación de los partidos políticos en América Latina es otro tema que ha generado un intenso debate debido a los riesgos que implica para la integridad de las democracias en la región. El multipartidismo, que promueve una mayor representación y diversidad en el espectro político, también conlleva desafíos significativos en términos de financiamiento. La dependencia de los recursos públicos asignados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) según los votos obtenidos, crea una desigualdad intrínseca entre los partidos, favoreciendo a los más grandes y establecidos en detrimento de los más pequeños y emergentes. Esta disparidad en el acceso a los fondos públicos puede tener consecuencias no deseadas, como la limitación de la capacidad de los partidos más pequeños para competir efectivamente en el ámbito político. Con menos recursos para acceder a los medios de comunicación y realizar campañas, estos partidos se encuentran en una clara desventaja, lo que puede afectar la pluralidad y el equilibrio del sistema político.

Además, la insuficiencia de fondos públicos puede empujar a los partidos políticos a buscar fuentes alternativas de financiamiento. Aquí es donde radica uno de los peligros más grandes: la tentación de recurrir a sectores oscuros o ilegales para obtener recursos. En sociedades donde el crimen organizado tiene una presencia

significativa, como el narcotráfico o el lavado de dinero, existe el riesgo de que estos grupos busquen influir en la política financiando partidos o campañas electorales. La incursión del crimen organizado en la política puede tener efectos devastadores. No solo compromete la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales, sino que también amenaza la seguridad del Estado y el bienestar de sus ciudadanos. Cuando los partidos políticos se ven influenciados por intereses ilegítimos, las políticas y decisiones gubernamentales pueden ser secuestradas por aquellos que buscan proteger sus propios intereses en lugar del interés público.

Los desafíos actuales del sistema electoral costarricense no deben verse como obstáculos insuperables, sino como la piedra angular para el fortalecimiento de una democracia que ha demostrado su resiliencia a lo largo de más de un siglo. La coyuntura actual, con su complejidad y sus exigencias, invita a una reflexión profunda y a la acción decidida para reafirmar los valores democráticos y adaptar las instituciones a las necesidades contemporáneas. Es una oportunidad única para que Costa Rica, guiada por la sabiduría acumulada y el ímpetu innovador de su gente, consolide su sistema político y electoral, asegurando así la representatividad, la transparencia y la efectividad que son el sello distintivo de su democracia centenaria. La participación ciudadana activa, el compromiso con la inclusión y la diversidad, y la búsqueda de consensos sólidos son los pilares sobre los cuales se puede construir un futuro prometedor.

*Reforma del Estado
para Enfrentar las Complejidades
del Siglo XXI*





Uno de los desafíos más importantes del siglo XXI es transformar al Estado en una organización más eficiente y excelente en los servicios que brinda.



Costa Rica se encuentra actualmente en una encrucijada, marcada por una crisis multidimensional que permea todos los estratos de la sociedad. La complejidad de esta situación es tal que su comprensión y resolución se tornan desafiantes. La crisis económica se refleja en la estancación de los ingresos del hogar y la persistencia de la pobreza. A nivel político, se observa una sensación de bloqueo institucional que demanda respuestas adaptativas y nuevos cursos de acción. En cuanto a la seguridad, la fragmentación urbana, la desigualdad y el crimen organizado contribuyen a un clima de incertidumbre. El sector educativo enfrenta retos significativos para adaptarse a las demandas de una economía globalizada y tecnológicamente avanzada. La salud pública, por su parte, se ve desafiada por la necesidad de atender a una gran población en un contexto de recursos limitados. Finalmente, la crisis ambiental exige una acción urgente para proteger la biodiversidad y mitigar los efectos del cambio climático. En el fondo de estas problemáticas se encuentra un Estado que parece obsoleto, incapaz de responder con la celeridad requerida a las necesidades contemporáneas. La crisis actual es un reflejo de múltiples fuerzas en acción, pero su raíz principal radica en la inadecuación de las estructuras estatales frente a los desafíos del siglo XXI.

Hacia un Estado moderno, eficiente, de alto nivel de excelencia en los servicios que brinda, y sintonizado con las necesidades e intereses de los costarricense. Este es el horizonte de realización de la reforma del Estado.

En el actual panorama socioeconómico y político de Costa Rica, la Reforma del Estado se destaca como un imperativo para alcanzar un desarrollo sostenible y mejorar la eficiencia gubernamental. La paradoja del sector público costarricense radica en su estructura anacrónica: un conglomerado de instituciones cimentadas en prácticas del pasado, lo que obstaculiza su capacidad de adaptación y respuesta rápida ante las fluctuaciones y demandas del contexto moderno. Esta rigidez contrasta marcadamente con la agilidad del sector privado, donde la adaptabilidad y la flexibilidad son pilares fundamentales para la supervivencia y el éxito. La necesidad de una reforma estatal es evidente, no solo para desenredar la maraña burocrática que frena la innovación y la acción, sino también para instaurar un modelo de gobernanza que sea resiliente y capaz de navegar los desafíos emergentes del siglo XXI. La transformación requerida implica una reevaluación profunda de las funciones estatales, la implementación de tecnologías avanzadas y la adopción de un enfoque centrado en el ciudadano que priorice la transparencia y la rendición de cuentas.

Solo así, Costa Rica podrá superar la crisis multidimensional actual y sentar las bases para un futuro próspero y equitativo. Esta reforma no solo es una respuesta a las limitaciones actuales, sino también una inversión en la capacidad del país para prosperar en un entorno global cada vez más interconectado y competitivo.

El Estado Costarricense, se configuró como lo conocemos, después de 1948, atendiendo a un contexto específico de modernización social, pero esa época era muy distinta a la actual. Las instituciones, una vez pilares de estabilidad y progreso, ahora exhiben signos de agotamiento funcional, manteniéndose activas más por inercia que por contribución efectiva. La persistencia de puestos de trabajo obsoletos, en una era definida por el avance tecnológico, plantea interrogantes sobre la resistencia al cambio dentro del aparato estatal. La reforma del Estado, un tema esquivo en el discurso público costarricense, se ve obstaculizada por dos fuerzas principales. Por un lado, la nostalgia por el Estado Benefactor genera resistencia a la clausura de entidades estatales, percibida como una amenaza al bienestar social y tildada de neoliberalismo. Por otro lado, la existencia de “quistes” de poder dentro de las organizaciones públicas crea un entorno resistente a la reforma, donde intereses personales y grupales están profundamente arraigados en la estructura institucional.

La urgencia de cambiar la situación actual en Costa Rica se ve frenada por la falta de consenso sobre la naturaleza y dirección del cambio necesario.

Existe un debate en el seno de la sociedad sobre si el marco institucional es adecuado tal como está, y si el problema radica en la falta de capacitación de los funcionarios para comprender y operar dentro de este sistema. Esta perspectiva sugiere que la ineficiencia administrativa y la lentitud en la toma de



La pluralidad moderada es sana para la democracia, pero necesitamos que esos nuevos partidos se mantengan, que vayan construyendo su historia y fortaleciendo los lazos con el electorado, que ubiquen claramente sus ideas en el espectro político, que sean capaces de generar cierta estabilidad.

*Abril Gordienko López,
Abogada, experta en Reforma
del Estado y participación
ciudadana*

decisiones se deben a una brecha en el conocimiento y habilidades del personal, más que a deficiencias estructurales del Estado. Sin embargo, esta postura es controvertida, ya que tiende a responsabilizar a los empleados públicos por las falencias del sistema, ignorando que son parte de un engranaje más amplio con múltiples factores contribuyentes. La realidad es que la inercia institucional y la resistencia al cambio son problemas sistémicos que no pueden atribuirse únicamente a la capacitación del personal.

La reestructuración del Estado en Costa Rica se enfrenta a un dilema central: la impopularidad de las decisiones reformistas. La población, cuyos intereses están profundamente entrelazados con el aparato público, ve con recelo cualquier cambio que amenace la estabilidad de las instituciones existentes. Las intervenciones que buscan transformar o suprimir funciones o entidades estatales se encuentran con una resistencia significativa, reflejada en manifestaciones públicas y repercusiones electorales.

Este fenómeno no es exclusivo de Costa Rica; es una característica inherente a las democracias donde la voluntad popular influye directamente en la política. Sin embargo, el costo político de las reformas estatales puede ser un obstáculo formidable para los líderes que buscan promover cambios necesarios para la modernización y eficiencia gubernamental. La clave para superar este desafío radica en la construcción de un consenso amplio, educando y comprometiendo a la ciudadanía en el proceso de reforma, destacando los beneficios a largo plazo y asegurando que las transformaciones sirvan al interés público sin comprometer el bienestar social. Por lo tanto, es esencial que cualquier propuesta de reestructuración sea acompañada de un diálogo inclusivo y transparente, que permita a los ciudadanos comprender y apoyar las medidas necesarias para un Estado más dinámico y capaz de enfrentar los retos del futuro. Solo así se podrá mitigar el costo político y avanzar hacia un sistema gubernamental que refleje las aspiraciones y necesidades de todos los costarricenses.

*La Actividad Agropecuaria
en Costa Rica:
Realidades y Desafíos en el Siglo XXI*



“

La economía agrícola sigue siendo fundamental en el sistema económico costarricense, y ahora se agregan aspectos relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.



Durante la época colonial, la supervivencia dependía del cultivo de la tierra, una práctica que evolucionó para satisfacer las demandas del mercado global con productos como el café en el siglo XIX. Este cultivo se convirtió en un pilar económico y un símbolo de la identidad nacional costarricense. A diferencia de otros países de América Latina, donde los latifundios dominaban el paisaje agrario, aprovechando la mano de obra indígena, Costa Rica se caracterizó por una distribución de tierras que favorecía las pequeñas propiedades, respondiendo a una endémica escasez de mano de obra autóctona.

Esta particularidad demográfica impidió la formación de grandes haciendas y, por ende, la explotación extensiva de la tierra y de sus habitantes. En consecuencia, se formó una sociedad con una distribución de riqueza más equitativa, lo que ha tenido implicaciones profundas en el desarrollo del país. La agricultura no solo ha sido la base de la economía costarricense, sino que también ha cimentado la singularidad de su sociedad. La falta de una clase terrateniente dominante permitió el surgimiento de una clase media rural, lo que contribuyó a una mayor estabilidad política y social. Además, la propiedad de la tierra se convirtió en un elemento democratizador, promoviendo una participación más activa de los ciudadanos en los asuntos públicos y políticos.

La agricultura representa un pilar fundamental en la estructura económica

En los tiempos de la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información y la cuarta revolución industrial, es fundamental que la economía agrícola costarricense siga creciendo y desarrollándose

y social de Costa Rica, trascendiendo su rol tradicional como generadora de divisas. Su importancia radica en su capacidad para fomentar la estabilidad social, especialmente en las comunidades rurales donde el bienestar de sus habitantes está intrínsecamente ligado a la salud del sector agrícola.



Ronald Solís,
Agricultor

La Asamblea Legislativa debería contar con una mayor participación de empresarios de distintos sectores productivos, para que esa vivencia, esa experiencia, pueda ser transmitida a los otros diputados y los ponga con los pies en la tierra.

En la segunda mitad del siglo XX, los gobiernos costarricenses reconocieron la relevancia de la agricultura y se esforzaron por mantener su vitalidad a través de políticas de apoyo. Estas políticas incluían la facilitación de financiamiento para los agricultores, lo cual era esencial para asegurar la continuidad de la producción y la subsistencia de las comunidades rurales.

Además, se brindó asistencia técnica para mejorar la productividad, lo que permitió a los agricultores no solo aumentar sus rendimientos sino también mejorar la calidad de sus productos. La diversificación de los cultivos exportables fue otra estrategia clave implementada en décadas pasadas. Dicha estrategia buscaba reducir la dependencia de unos pocos productos y abrir nuevas oportunidades en los mercados internacionales. Al expandir la gama de productos agrícolas disponibles para la exportación, Costa Rica pudo mitigar los riesgos asociados con la volatilidad de los precios en el mercado global y asegurar una fuente de ingresos más estable para sus agricultores.

En el contexto de la globalización del siglo XXI, Costa Rica enfrenta desafíos complejos para mantener la competitividad de su sector agrícola. Los tratados de libre comercio han sido una espada de doble filo: han impulsado la exportación de productos tradicionales y emergentes, pero también han expuesto al sector a una competencia feroz y a políticas gubernamentales que no siempre han favorecido a los productores locales. La apertura comercial ha reforzado la presencia de Costa Rica en los mercados internacionales, especialmente con productos como el banano, el café y la piña. Sin embargo, esta misma apertura ha llevado a una disminución en el apoyo estatal, evidenciado en la reducción del financiamiento y el deterioro de la infraestructura esencial para la exportación. Además, la fragmentación institucional ha resultado en políticas dispersas que no logran un impacto significativo en

el fortalecimiento del sector. Esta situación ha favorecido la creación de oligopolios de importadores, perjudicando a los productores nacionales y contribuyendo al desempleo rural. La pobreza y la desigualdad social que surgen de esta realidad representan un retroceso en los avances sociales que Costa Rica ha logrado gracias a su tradición agrícola.

La modernización del sector agrícola costarricense es un imperativo para mantener su competitividad y asegurar la seguridad alimentaria del país. La incorporación de tecnologías avanzadas en las prácticas agrícolas es un paso crucial en este proceso de transformación. La fumigación y el riego mediante drones ofrecen una aplicación de recursos más precisa y eficiente, reduciendo el desperdicio y minimizando el impacto ambiental. La implementación de la tecnología blockchain puede revolucionar la trazabilidad y la transparencia en la cadena de suministro agrícola, permitiendo un seguimiento detallado desde la siembra hasta el consumidor final. El uso de agroquímicos más eficientes y menos dañinos es esencial para proteger tanto la salud humana como los ecosistemas. En este sentido, el desarrollo y la adopción de bioinsumos ecológicos representan una alternativa sostenible que puede mejorar la salud del suelo y la biodiversidad. Estas innovaciones no solo optimizan los procesos y aumentan la productividad, sino que también contribuyen a la sostenibilidad a largo plazo del sector. Además, es fundamental fomentar una **mentalidad empresarial** entre los jóvenes, especialmente en las zonas rurales. La

educación en gestión empresarial, finanzas y marketing, junto con el conocimiento técnico agrícola, puede empoderar a los jóvenes para que vean la agricultura no solo como una actividad de subsistencia, sino como una empresa viable y rentable. Esto implica un cambio en la percepción de la agricultura, valorándola como una carrera profesional con potencial de crecimiento y desarrollo.

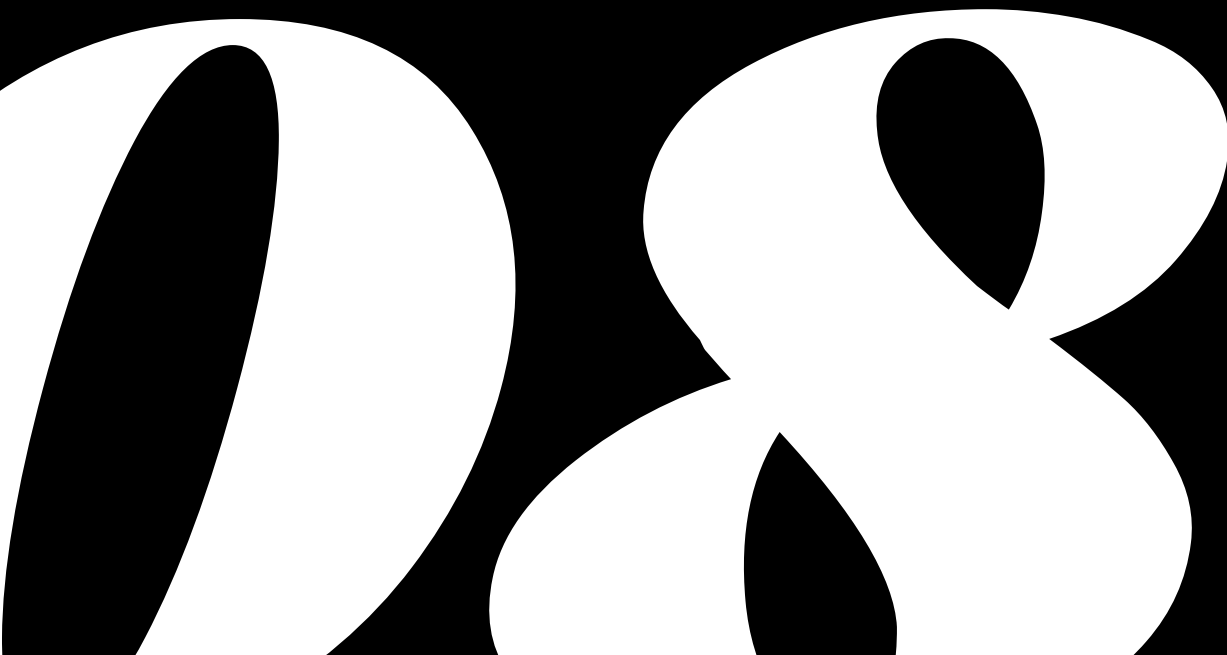
La modernización del sector agrícola en Costa Rica es un objetivo multidimensional que requiere una sinergia entre diversos actores de la sociedad. El gobierno, las instituciones educativas, las organizaciones del sector privado y los agricultores deben colaborar estrechamente para crear un ecosistema que favorezca la innovación y el emprendimiento en el campo. Las políticas públicas juegan un papel crucial en este proceso, ya que deben proporcionar las condiciones necesarias para que la agricultura prospere en la era moderna. Esto incluye facilitar el acceso a financiamiento adecuado y oportuno, que permita a los agricultores invertir en tecnologías avanzadas y mejorar sus prácticas de cultivo. Además, es esencial que se fomente la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que sean sostenibles y adaptadas a las condiciones locales. La capacitación y la mentoría son también componentes esenciales para preparar a la próxima generación de agricultores. Los programas educativos deben ir más allá de la enseñanza de técnicas agrícolas; deben inculcar una mentalidad empresarial y proporcionar las habilidades necesarias para gestionar negocios agrícolas exitosos. Esto implica entender la agricultura no solo como una actividad

productiva, sino como una empresa que requiere conocimientos en gestión, finanzas, marketing y sostenibilidad. La visión a largo plazo para la agricultura costarricense debe ser holística, integrando las necesidades económicas, sociales y ambientales. Con un compromiso firme y coordinado, el país puede transformar su sector agrícola en un modelo de innovación y sostenibilidad, asegurando un futuro próspero para las generaciones venideras.





*Los Retos de la Economía
Costarricense en el Siglo XXI*





Luego del modelo de desarrollo agro-exportador de la República Liberal, siguió la estrategia de sustitución de importaciones y Estado de Bienestar, luego se diseñó y ejecuto el modelo de apertura comercial y desmonopolización del sector público, ahora los costarricenses buscan seguir avanzando por la senda de la apertura al mundo, la excelencia estatal y el bienestar social.



En las primeras décadas del siglo XXI, la economía de Costa Rica ha enfrentado una serie de desafíos que han puesto a prueba su estructura y capacidad de adaptación. La apertura al comercio internacional, una característica distintiva de su modelo económico, ha traído consigo tanto oportunidades de crecimiento como exposición a la volatilidad del mercado global.

Esta dualidad se manifiesta en la forma en que el país ha logrado diversificar sus exportaciones, atrayendo inversión extranjera y desarrollando sectores clave como el turismo y la tecnología. Sin embargo, esta misma apertura ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de la economía ante choques externos, como los experimentados durante la pandemia de COVID-19, que paralizó sectores enteros y desencadenó una crisis económica sin precedentes.

Los esfuerzos modernizadores han enfrentado serios obstáculos en los últimos tiempos, tales como la pandemia del COVID-19 y la excesiva burocratización de las instituciones públicas. En el siglo XXI es clave fortalecer el Sistema Nacional de Salud e impulsar la reforma del Estado.

La economía costarricense, históricamente dependiente de la agricultura, ha evolucionado hacia una mayor diversificación, pero aún mantiene una fuerte dependencia de la importación de insumos y tecnología. Sectores como el turismo, que se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento, son extremadamente sensibles a las condiciones económicas globales. La pandemia ilustró esta fragilidad, ya que las restricciones de viaje y el cierre de fronteras afectaron drásticamente al sector, provocando una caída significativa en los ingresos y poniendo en riesgo miles de empleos. Por otro lado, la agricultura y la industria, aunque menos volátiles que el turismo, no están exentas de desafíos. La dependencia de insumos importados para la producción agrícola e industrial limita la capacidad de respuesta del país ante fluctuaciones en los precios internacionales y alteraciones en las cadenas de suministro.

Esta situación se vio exacerbada durante la pandemia, cuando las interrupciones en el comercio internacional pusieron de manifiesto la necesidad de una mayor autosuficiencia y resiliencia en estos sectores.

El tamaño y la eficiencia del Estado han sido objeto de debate en el contexto de estos

desafíos económicos. La crítica se centra en la proporción del gasto público financiado por deuda, lo que ha llevado a una situación fiscal insostenible. El Estado, con su estructura actual, no solo enfrenta dificultades para financiar sus operaciones, sino que también impone una carga sobre la productividad del sector privado. La ineficiencia estatal se traduce en un gasto excesivo que no se refleja en una mejora proporcional de los servicios públicos, afectando la competitividad del país y la calidad de vida de sus habitantes.



*Eduardo Lizano Fait,
Economista, Ex – Presidente
del Banco Central*

Las consecuencias económicas de estos problemas estructurales son evidentes: el desempleo ha alcanzado niveles preocupantes, la inflación ha erosionado el poder adquisitivo de los consumidores y la calidad de vida de la población ha sufrido un deterioro.

El crecimiento económico no se puede dar si no hay un entorno que lo permita. Las inversiones públicas y privadas no se van a dar si hay problemas políticos y sociales sin resolver.

Estos factores, combinados con una política fiscal y monetaria que ha sido percibida

como errática, han contribuido a un clima de incertidumbre que desalienta la inversión y el desarrollo económico. La economía de Costa Rica, al enfrentar los vientos cambiantes del siglo XXI, ha tenido que lidiar con una serie de desafíos que han puesto a prueba su fortaleza y capacidad de adaptación.

Las medidas fiscales y monetarias implementadas han sido pasos necesarios en respuesta a la creciente crisis económica. Sin embargo, su impacto ha sido limitado, ya que estas acciones han tendido a ser paliativas y centradas en la estabilización más que en la transformación. La introducción de la Regla Fiscal buscaba imponer disciplina en el manejo de las finanzas públicas y reducir el déficit. A pesar de ciertos avances, su efectividad ha sido cuestionada, y su capacidad para generar un cambio significativo en la economía ha sido limitada. Los acuerdos con el FMI y la emisión de eurobonos han proporcionado liquidez al gobierno, pero representan soluciones temporales que no resuelven los problemas estructurales de fondo.

La política monetaria ha intentado equilibrar el control de la inflación con el estímulo al crecimiento económico. No obstante, la falta de consistencia y previsibilidad ha generado incertidumbre entre los inversores y ha afectado la confianza en la economía del país. Esta incertidumbre se refleja en la volatilidad del tipo de cambio y en la percepción de riesgo por parte de los mercados financieros.

Para superar estos desafíos, es imperativo que Costa Rica emprenda reformas profundas que vayan más allá de las medidas fiscales y monetarias. Se necesita una reevaluación de la función del Estado en la economía, buscando optimizar la eficiencia y reducir el tamaño del aparato gubernamental. Esto implica una revisión de los programas de gasto público, una racionalización de las entidades estatales

y una mayor transparencia y rendición de cuentas. Un nuevo pacto social que incluya a todos los sectores de la sociedad es esencial para establecer un consenso sobre las rutas de desarrollo económico. Este pacto debería priorizar la competitividad, la eficiencia y el impulso hacia la innovación tecnológica, elementos clave para una economía moderna y adaptable.

La colaboración entre el Estado y la sociedad civil es fundamental para lograr estos objetivos y para construir una economía que inspire confianza y atraiga inversiones. El futuro económico de Costa Rica también depende de su capacidad para adaptarse a los cambios globales, como la digitalización de las transacciones comerciales y la integración de las nuevas formas de moneda digital en el sistema financiero. Estos cambios representan tanto desafíos como oportunidades, y requieren de una economía que sea ágil y esté preparada para la innovación. Las soluciones a los retos económicos de Costa Rica deben ser integrales y enfocadas en el largo plazo. La transformación es esencial para superar la dependencia de soluciones temporales y para establecer una base sólida para el crecimiento.

Con una visión clara y un compromiso con la reforma, Costa Rica puede asegurar un futuro económico lleno de oportunidades y adaptabilidad.

***Empleo Privado en Costa Rica:
Más Allá de una Reforma Laboral***





El mundo del trabajo es fundamental en el desarrollo de las sociedades, por eso en Costa Rica se promueve la dignidad de los trabajadores y su permanente capacitación.



En la economía capitalista contemporánea, el trabajo y la producción se entrelazan en una danza simbiótica; uno no puede existir sin el otro. La producción demanda la creación de empleos que lleven a cabo los procesos productivos, mientras que es el capital generado por el trabajo el que impulsa el crecimiento económico mediante la venta de productos y la prestación de servicios. El trabajo es, por tanto, el alfa y el omega de toda relación económica, el punto de partida y el destino final de cada ciclo productivo. En Costa Rica, la importancia crítica del trabajo ha sido lamentablemente relegada, regulada por leyes que no han evolucionado al ritmo de las transformaciones globales. Nos enfrentamos a un marco legal que parece anclado en una era pasada, incapaz de responder a las necesidades de un mercado globalizado y altamente tecnificado. Esta desconexión entre la legislación laboral y las realidades del siglo XXI no solo frena el progreso económico, sino que también limita la capacidad de Costa Rica para competir en la arena internacional.

La fuerza laboral de los trabajadores costarricense, unida a la de los empresarios, emprendedores y profesionales, constituye un pilar esencial del sistema productivo nacional. Tierra, trabajo, capital, conocimiento, información, estos son los factores claves del desarrollo nacional en el siglo XXI.

Las leyes laborales obsoletas obstaculizan la innovación y la eficiencia, y perpetúan estructuras de trabajo que ya no son viables en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados. Para que Costa Rica prospere en este nuevo orden económico, es imperativo que se reformen estas leyes, adaptándolas a las exigencias de mercados conectados y tecnológicamente avanzados. Esto no solo mejorará la competitividad del país, sino que también asegurará que los trabajadores costarricenses estén equipados para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades de esta era hiperconectada. La reforma laboral es, por lo tanto, una necesidad urgente. Debe ser una que abraza la flexibilidad, promueva la capacitación continua y fomente un ambiente de trabajo que sea tanto productivo como justo. Al hacerlo, Costa Rica no solo actualizará su legislación laboral, sino que también reafirmará su compromiso con el desarrollo económico sostenible y la justicia social, asegurando que el trabajo siga siendo el principio y fin de una relación económica saludable y próspera.

El desafío primordial para Costa Rica radica en la creación de empleos de calidad y en asegurar un mercado laboral equitativo. Para ello, es imperativo que el Estado establezca un entorno favorable para el nacimiento y desarrollo de nuevas empresas, las cuales son vitales para la generación de empleo y riqueza. Este apoyo estatal debe extenderse para garantizar que las empresas operen dentro de la legalidad, asegurando así los derechos fundamentales de los trabajadores. Paralelamente, es esencial ofrecer incentivos atractivos tanto a empresas

locales como internacionales que deseen invertir en el país. Los mejores estímulos provienen de un marco legal claro y adaptable, y de una fuerza laboral respaldada por una educación académica y técnica de alta calidad. Esto significa que una reforma laboral, por sí sola, no puede cambiar la realidad del empleo en Costa Rica a menos que sea parte de una transformación más amplia. Esta debe incluir la reestructuración del aparato burocrático del Estado, alineándolo con los estándares de eficiencia del sector privado, y una reevaluación de las prioridades del sistema educativo para satisfacer las demandas de los sectores productivos nacionales.

El acceso a empleos bien remunerados en Costa Rica no solo es un desafío económico, sino también un imperativo social y político. La planificación estatal juega un papel crucial en la superación de las brechas laborales existentes, y debe abordar de manera integral aspectos como la planificación urbana, la infraestructura vial y la educación. La planificación urbana es fundamental para el desarrollo económico y la equidad social. Una planificación efectiva puede ayudar a distribuir los recursos y oportunidades de manera más equitativa, evitando la concentración excesiva en el Gran Área Metropolitana y promoviendo el desarrollo en zonas costeras y rurales. Esto no solo mejora la calidad de vida en estas áreas, sino que también crea nuevos mercados y oportunidades de empleo. La infraestructura vial y portuaria es otro componente esencial para el acceso a empleos de calidad. Mejorar la red de carreteras y el transporte público

facilita la movilidad de los trabajadores y reduce los costos y tiempos de traslado. Esto es especialmente importante para las personas que viven en zonas alejadas de los centros urbanos, donde las oportunidades de empleo suelen ser más limitadas. La expansión y mejora del sistema educativo es igualmente crítica. Una educación de calidad es la base para una fuerza laboral competente y adaptable. El sistema educativo debe estar alineado con las necesidades del mercado laboral, ofreciendo formación técnica y académica que prepare a los estudiantes para los empleos actuales y futuros. Además, debe fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la innovación, habilidades esenciales en la economía global.

En la era de la digitalización y la virtualización, el concepto tradicional de empleo está siendo cuestionado. La presencialidad, una vez considerada indispensable, ahora es solo una opción entre muchas. El trabajo remoto, los equipos distribuidos globalmente y las plataformas colaborativas en línea son ejemplos de cómo la tecnología está redefiniendo el lugar y la manera en que trabajamos. Costa Rica, al igual que el resto del mundo, debe adaptarse a estos modelos laborales futuristas para mantenerse a la vanguardia del desarrollo tecnológico. Los modelos laborales emergentes, como el trabajo por proyectos, el freelancing y el nomadismo digital, ofrecen flexibilidad y autonomía, desafiando la noción de un empleo de 9 a 5 en una oficina fija. Las organizaciones horizontales que operan sin jerarquías tradicionales y los espacios de trabajo compartidos que fomentan

la colaboración y la innovación son también parte de este nuevo paradigma. Costa Rica podría adoptar estas tendencias para impulsar su economía, aprovechando su fuerza laboral altamente educada y su posición estratégica en el continente americano.

La transición hacia estos modelos requiere no solo infraestructura tecnológica, sino también un cambio cultural y educativo. La inversión en banda ancha de alta velocidad, la capacitación en herramientas digitales y la adaptación del sistema educativo para enfocarse en habilidades como la programación, el análisis de datos y el diseño de experiencia de usuario serán fundamentales. Al hacerlo, Costa Rica no solo se preparará para el futuro del trabajo, sino que también se posicionará como un líder en la economía digital global. Estos elementos, junto con políticas públicas que promuevan la igualdad de género, la inclusión de los jóvenes y el desarrollo regional, pueden transformar el panorama laboral de Costa Rica. La tarea requiere un enfoque colaborativo entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, y un compromiso con la inversión a largo plazo en el capital humano y la infraestructura del país. Solo así se podrá garantizar que todos los costarricenses tengan acceso a empleos de calidad y puedan contribuir plenamente al desarrollo económico y social de la nación.

Empresas Familiares:
Trabajo y Éxito



“

*En el mundo empresarial costarricense ha
sido y es esencial el aporte
de las empresas familiares.*



En el contexto costarricense, la génesis empresarial frecuentemente se origina en el ámbito individual, evolucionando con el tiempo hacia una estructura familiar. Esta transición no es meramente circunstancial, sino que responde a una serie de factores socioeconómicos intrínsecos a la cultura y dinámica económica del país. La empresa familiar, por ende, se convierte en un pilar fundamental dentro del tejido empresarial de Costa Rica. La necesidad de subsistencia y la aspiración de mejora económica son los motores que impulsan la creación de estas empresas. En un entorno donde la adversidad económica es una realidad palpable para muchos, el emprendimiento surge como una vía de escape hacia la estabilidad financiera. Sin embargo, este ímpetu inicial se ve acompañado de una urgencia que trasciende la mera supervivencia económica, inyectando en la empresa una dinámica de trabajo intensa y una resiliencia ante los desafíos del mercado. Esta urgencia, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en una ventaja competitiva. La presión para superar las dificultades económicas iniciales fomenta una cultura de trabajo arduo y una adaptabilidad que permite a estas empresas navegar en las turbulentas aguas de la competencia. La voracidad del mercado, con su constante demanda de innovación y eficiencia, se convierte en un catalizador que impulsa a estas empresas a desarrollar estrategias de negocio más robustas y sostenibles. No obstante, es crucial reconocer que esta presión también puede generar vulnerabilidades. La

urgencia puede llevar a decisiones apresuradas o a una planificación deficiente, lo que a largo plazo podría comprometer la viabilidad de la empresa. Por ello, es esencial que estas iniciativas empresariales se apoyen en una base sólida de conocimientos y estrategias de gestión que les permitan no solo sobrevivir sino prosperar en un entorno económico desafiante.

En el ámbito de los emprendimientos familiares, la figura del líder emerge con una prominencia singular. Este líder, dotado de una ética de trabajo ejemplar, se erige como el eje central sobre el cual gira la estructura organizativa de la empresa. Su rol trasciende la mera gestión empresarial; asume la responsabilidad de ser el sustento económico no solo de su núcleo familiar sino también de las familias de sus empleados, cuyo bienestar depende intrínsecamente del éxito de la empresa.

Un número creciente de empresas familiares marcan el impacto social de las capacidades empresariales

La sucesión representa un momento decisivo en la vida de estas empresas familiares. Es un proceso cargado de incertidumbre, donde la continuidad de la visión y los valores del fundador se ponen a prueba. El desafío se intensifica cuando el liderazgo ha sido profundamente personalista, con un líder que ha impregnado cada aspecto de la empresa con su filosofía y modo de operar. En tales circunstancias, la transición puede ser un terreno fértil para el riesgo y el fracaso. La preparación para la sucesión, por lo tanto, debe ser meticulosa y considerada, un proceso que idealmente comienza mucho antes de que

la necesidad se haga presente.

Es imperativo que el sucesor sea inculcado con los principios y la ética de trabajo que han sido el sello distintivo del líder, al tiempo que se le permite desarrollar su propia identidad de liderazgo. Esto requiere un equilibrio delicado entre la preservación de la esencia de la empresa y la adaptación a nuevas perspectivas y enfoques. Una transición generacional exitosa es aquella que logra mantener la esencia de la empresa, su cultura y sus valores, mientras se adapta a las exigencias cambiantes del mercado y la sociedad. La organización debe ser capaz de evolucionar, de reinventarse sin perder su identidad, asegurando así su sostenibilidad y relevancia a largo plazo. En última instancia, la sucesión no es solo un cambio de liderazgo, sino una oportunidad para la renovación y el fortalecimiento de la empresa familiar.

Las empresas familiares en Costa Rica que han trascendido diversas generaciones han logrado este hito a través de una sucesión de liderazgo efectiva y estratégica. La clave de su perdurabilidad radica en la capacidad de suscitar y mantener el interés de las generaciones venideras, inculcando en ellos desde temprana edad la importancia de la empresa y su rol dentro de la misma. La formación de los descendientes se convierte en un pilar esencial, promoviendo su educación en disciplinas relacionadas con el negocio para equiparlos con las herramientas necesarias que les permitan no solo ingresar, sino también innovar y profesionalizar la gestión de la organización. La inversión en la

profesionalización no se limita únicamente al capital humano; también se extiende a la tecnificación y a la implementación de estrategias de negocio que sean tanto flexibles como eficaces. Este enfoque holístico asegura que la empresa no solo se mantenga al día con las tendencias actuales y las demandas del mercado, sino que también esté preparada para adaptarse y prosperar frente a los inevitables cambios futuros. El éxito de estas empresas no se mide únicamente en términos de supervivencia a lo largo de los años, sino también en su habilidad para renovarse y mantenerse relevantes.

En Costa Rica, el éxito empresarial no puede ser comprendido ni asegurado a través de una lente meramente individualista. La narrativa del emprendedurismo, que exalta el trabajo arduo y la planificación meticulosa como garantías de éxito, omite una realidad más compleja y multifacética. Si bien estas cualidades son indudablemente valiosas, el contexto en el que operan las empresas es un factor determinante que a menudo escapa al control del emprendedor. El marco institucional y el contexto político-económico juegan un papel crucial en el destino de los emprendimientos. Las políticas estatales, la estabilidad económica, la infraestructura y el acceso a mercados son elementos que influyen significativamente en la viabilidad de una empresa. En este sentido, el fracaso empresarial no puede atribuirse exclusivamente a la falta de esfuerzo o planificación por parte del emprendedor. Más bien, es el resultado de una compleja interacción entre la iniciativa

individual y un sistema que, en ocasiones, no responde adecuadamente a las necesidades del sector empresarial. Las decisiones tomadas por aquellos en posiciones de poder, que no siempre poseen una comprensión profunda de la lógica empresarial, pueden tener un impacto directo y a veces adverso en el entorno empresarial. Esto plantea un desafío significativo para los emprendedores, quienes deben navegar en un mar de variables que están más allá de su influencia directa. Por lo tanto, es esencial que el discurso sobre el emprendedurismo se amplíe para reconocer y abordar estos factores externos. Debe fomentarse un diálogo que no solo celebre la tenacidad y la visión del emprendedor, sino que también abogue por un entorno más propicio y justo que permita que las empresas florezcan. Solo entonces, el espíritu emprendedor podrá alcanzar su máximo potencial, contribuyendo al desarrollo económico y social de Costa Rica.





Seguridad Jurídica y Transparencia:
Los Retos de la Política Fiscal
Costarricense



“

Es clave avanzar hacia un sistema tributario moderno donde los impuestos no sean una obstrucción del esfuerzo productivo, económico y social, sino un instrumento en función de fortalecer las capacidades emprendedoras, de generación y distribución de riqueza.



La configuración de un marco jurídico fiscal que se distinga por su claridad y sencillez constituye un imperativo categórico para la garantía de los ingresos estatales, al proporcionar una estructura normativa que sea inteligible y accesible para la totalidad del cuerpo social contribuyente. La transparencia legislativa es un prerrequisito para que sujetos fiscales, tanto naturales como jurídicos, no solo cumplan con sus deberes tributarios, sino que también ejerzan los derechos que les son inherentes, lo cual es esencial para incentivar una cultura de responsabilidad fiscal. Además, un sistema exento de complejidades superfluas facilita la gestión tributaria y disminuye la carga administrativa para los contribuyentes, en especial para aquellos con recursos limitados para maniobrar dentro de un sistema de naturaleza intrincada.

Por otra parte, la simplicidad y la transparencia en la normativa fiscal coadyuvan a la percepción de equidad en el sistema tributario. Esta percepción es crucial, ya que la sensación de justicia en la imposición tributaria es fundamental para sostener la confianza en las instituciones estatales y en el sistema fiscal en su conjunto. Cuando los contribuyentes se consideran tratados de manera equitativa y perciben que otros también están aportando su cuota proporcional, es más probable que cumplan voluntariamente con sus obligaciones fiscales. Esto puede resultar en una disminución de la evasión y el fraude fiscal, lo que se traduce en una recaudación más efectiva sin la necesidad de incrementar los tipos impositivos. Además, es imperativo reconocer que los impuestos son

el mecanismo primordial mediante el cual el Estado financia servicios públicos esenciales como la educación, la salud y la seguridad. El acto de contribuir tributariamente, por ende, trasciende la mera obligación legal y se convierte en una manifestación de compromiso con el bienestar colectivo y el progreso social. Un sistema fiscal eficaz y equitativo es también un instrumento clave para la redistribución de la riqueza y la atenuación de las disparidades socioeconómicas, lo que resalta la relevancia social del cumplimiento tributario.

La creación de un sistema tributario que promueva la justicia distributiva y, al mismo tiempo, las capacidades empresariales, obreras y profesionales, es una urgencia en la Costa Rica del Siglo XXI.

La situación fiscal de Costa Rica, caracterizada por un déficit persistente que ha desafiado la estabilidad del aparato estatal, es un reflejo de las complejidades inherentes a su sistema tributario. Este escenario fiscal desafiante se ve exacerbado por la existencia de un laberinto de impuestos, muchos de los cuales han quedado obsoletos o contribuyen mínimamente al total de la recaudación, pero que imponen una carga administrativa significativa tanto para los contribuyentes como para la administración tributaria. La proliferación de tributos, algunos con una base imponible marginal y otros con estructuras de cálculo complejas, como el impuesto solidario, genera una barrera para la comprensión y el cumplimiento fiscal. La complejidad del impuesto solidario, por ejemplo, requiere a menudo la intervención de especialistas en contabilidad y tramitación,

lo que incrementa los costos operativos de las empresas¹. Esta situación no solo afecta la eficiencia de la recaudación, sino que también puede desincentivar la inversión y el crecimiento económico.

La reciente inclusión de Costa Rica en la lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales de la Unión Europea (UE) ha suscitado un debate significativo sobre la seguridad jurídica y la eficacia del sistema tributario del país. Esta medida, refleja una preocupación internacional por la gobernanza fiscal y la transparencia, y pone de manifiesto la necesidad de que Costa Rica aborde las deficiencias percibidas en su régimen fiscal. La interpretación de la UE sugiere que el sistema tributario costarricense debería gravar las rentas pasivas generadas en el extranjero por residentes fiscales del país, lo cual es una práctica común en muchos países desarrollados que aplican el principio de renta mundial basado en la residencia. Sin embargo, el sistema tributario de Costa Rica se basa en el principio de territorialidad, gravando únicamente las rentas generadas dentro de sus fronteras. El fallo de la Sala Constitucional de Costa Rica, que determinó que las rentas generadas en el extranjero con capitales nacionales deben ser gravadas, ha generado incertidumbre, ya que parece estar en desacuerdo con la lógica del sistema tributario territorial del país. Este fallo ha sido interpretado por algunos como un paso hacia la implementación de un sistema de renta mundial en Costa Rica, lo cual plantea desafíos significativos, dada la dificultad de rastrear capitales globales en una era de digitalización

financiera.

Si bien la aparición en dicha lista podría atribuirse a una gestión deficiente y a un déficit de diálogo entre las partes, lo que verdaderamente suscita alarma es la intervención de la Sala Constitucional en asuntos tributarios.



Mario Gutiérrez Herrera,
Contador Público, Experto en Finanzas,
Certificado en Precios de Transferencia

Hace falta una reestructuración general de nuestro sistema tributario, una adecuación a los tiempos modernos que implique la total digitalización. Ahora las personas y las empresas hacen negocios a distancia por lo que el principio de territorialidad aumente precios de servicios contratados en el extranjero y reduce la competitividad de las empresas Costarricenses.

Tradicionalmente, la modificación del sistema tributario es una prerrogativa del Poder Legislativo, y la incursión del Poder Judicial en este terreno sugiere una transgresión de

los límites constitucionales establecidos entre los poderes del Estado. Esta intromisión no solo es inusual, sino que también plantea interrogantes sobre la separación de poderes, un principio fundamental en cualquier república democrática. La acción de la Sala Constitucional, al dictaminar sobre la tributación de rentas generadas en el extranjero por capitales nacionales, parece usurpar la función legislativa, creando un precedente de incertidumbre jurídica. Tal inestabilidad puede tener repercusiones significativas, socavando la confianza de los contribuyentes y potenciales inversores en la solidez y previsibilidad del marco legal costarricense.

La situación plantea interrogantes sobre la capacidad de Costa Rica para adaptarse a las expectativas internacionales sin comprometer su soberanía fiscal y sin imponer cargas administrativas y financieras insostenibles a sus contribuyentes. La respuesta a este dilema requerirá un análisis cuidadoso y un diálogo constructivo entre los responsables de la formulación de políticas, los expertos fiscales y la comunidad internacional para encontrar un equilibrio entre las demandas de la gobernanza fiscal global y las realidades prácticas del sistema tributario costarricense. Además la necesidad de una reforma tributaria que simplifique el sistema impositivo es palpable. Una estructura más racionalizada podría mejorar la eficiencia administrativa, reducir los costos de cumplimiento para los contribuyentes y potencialmente aumentar la base imponible. Al mismo tiempo, es crucial que cualquier reforma mantenga un enfoque

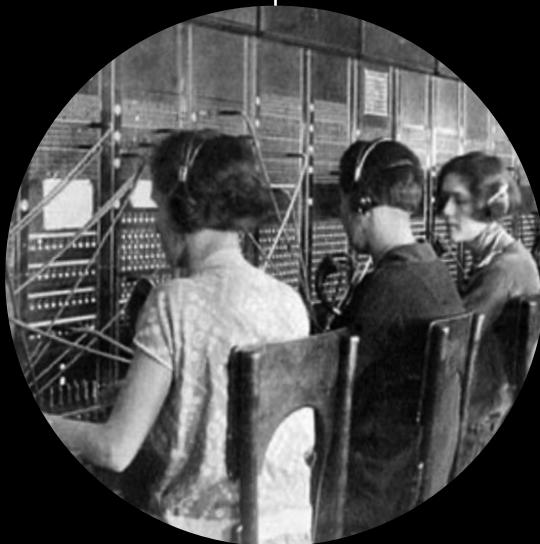
equitativo, asegurando que los impuestos continúen cumpliendo su función redistributiva y financiando adecuadamente los servicios públicos esenciales. En este contexto, el debate sobre la reforma fiscal en Costa Rica debe considerar no solo la simplificación del sistema tributario, sino también la modernización de la administración fiscal, la mejora de los mecanismos de control y la promoción de una cultura de cumplimiento tributario. Estas medidas podrían contribuir a una solución más sostenible para los desafíos fiscales del país y, en última instancia, fortalecer la confianza en el sistema tributario y en el aparato estatal.

***Estado y Sectores Productivos:
Hacia un Estado Facilitador
del Éxito Económico***

12

“

*Instituciones estatales eficaces y excelentes
al servicio del desarrollo económico, social
y político.*



En la época del Estado Empresario, el crecimiento económico se encontraba intrínsecamente ligado a la intervención pública en sectores clave de la producción. Esta participación no solo era evidente en la provisión de bienes y servicios, sino también en la regulación y el fomento de industrias estratégicas. El Estado, en su papel de actor económico predominante, ejercía una influencia decisiva en la orientación del desarrollo nacional. Sin embargo, la transición hacia un modelo de producción más liberalizado al final del siglo XX marcó un punto de inflexión. La globalización y la liberalización comercial exigían un replanteamiento de las políticas estatales para adaptarse a un mercado cada vez más competitivo y dinámico. Era imperativo que las regulaciones estatales evolucionaran para facilitar la iniciativa privada y la inversión extranjera, elementos considerados cruciales para la inserción exitosa en la economía mundial.

El Estado Constitucional de Derecho, respetuoso del pluralismo y del régimen de libertades, debe cooperar en el bienestar económico, social y político de empresarios y trabajadores.

Contrariamente a estas expectativas, el Estado no logró desempeñar un papel facilitador en este nuevo escenario. Por el contrario, se convirtió en un ente burocrático que, lejos de promover la eficiencia, se asoció con la lentitud y la rigidez. La persistencia de prácticas burocráticas obsoletas ha sido un factor que ha contribuido a la erosión de la competitividad del sector productivo nacional. Además, la formulación de políticas públicas ha sido objeto de críticas por su impacto negativo en la economía. En muchos casos, estas políticas han resultado ser contraproducentes, imponiendo cargas adicionales a las empresas y desincentivando la innovación. La falta de una visión estratégica y de un enfoque coherente en la política económica ha generado incertidumbre y ha limitado el potencial de crecimiento. Es crucial reconocer que la eficacia del Estado no se mide únicamente por su tamaño o su capacidad de intervención, sino por su habilidad para crear un entorno propicio para el desarrollo económico.



Lionel Peralta,
Empresario

A nivel macro, Costa Rica enfrenta una serie de retos que, de no superarse, son una amenaza para los sectores productivos, impactando directamente el empleo y la generación de riqueza para la sociedad.

Esto implica una redefinición de su rol, pasando de ser un agente económico directo a un facilitador que promueva la estabilidad, la transparencia y la equidad.

La política cambiaria del Banco Central de Costa Rica (BCCR), que ha permitido una apreciación sin precedentes del colón, puede ser interpretada desde varias aristas. Por un lado, el BCCR argumenta que esta fortaleza monetaria es el reflejo de un modelo económico robusto, impulsado por un incremento en el ingreso de divisas debido a la recuperación postpandémica y al éxito del sector exportador. Sin embargo, esta perspectiva no contempla la totalidad del panorama económico y sus implicaciones a largo plazo. La apreciación del colón, si bien puede tener efectos inmediatos en la contención de la inflación, no es una estrategia sostenible en el tiempo. Esta política cambiaria, al no ser acompañada de reformas estructurales, erosiona gradualmente la base del sector productivo. Esta situación impone una carga desproporcionada sobre los empresarios, quienes deben lidiar con las consecuencias de una política que favorece la estabilidad de precios a corto plazo, pero que ignora los efectos adversos en la producción y el empleo. La apreciación del colón, al no ser contrarrestada con medidas que promuevan la eficiencia y la innovación, puede conducir a un ciclo vicioso de desinversión y desaceleración económica.

La apreciación del colón frente al dólar en Costa Rica es un fenómeno que ha generado una serie de efectos en cadena dentro de la

economía nacional, afectando de manera particular a ciertos sectores productivos. Los más impactados son aquellos cuyas operaciones están estrechamente vinculadas con el mercado internacional, como la exportación de bienes y la industria turística. Estos sectores se enfrentan a una paradoja económica: mientras que sus ingresos provienen en gran medida de transacciones en dólares, sus costos operativos se mantienen en colones, lo que resulta en una disminución de la rentabilidad cuando la moneda local se fortalece. En el ámbito agrícola, los productores de bienes tradicionales de exportación experimentan una reducción en sus márgenes de ganancia, ya que el valor de sus ventas en el extranjero disminuye al ser convertido a una moneda local más fuerte. Esto afecta directamente su capacidad para invertir en mejoras, innovación y expansión de sus operaciones.

Similarmente, el turismo, que es un pilar fundamental para la economía costarricense, sufre cuando el colón fuerte hace que los costos para los visitantes extranjeros aumenten, disminuyendo así la competitividad del país como destino turístico atractivo. Las zonas francas, que son hogar de una variedad de empresas multinacionales y locales enfocadas en la exportación, también se ven perjudicadas. La apreciación del colón puede llevar a estas empresas a reconsiderar su presencia en Costa Rica, ya que los beneficios económicos de operar en el país se ven disminuidos. Esto podría resultar en la reubicación de operaciones a países con condiciones monetarias más favorables, lo que a su vez podría provocar

una pérdida de empleos y una disminución en la inversión extranjera directa. Por último, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) que compiten en el mercado local también enfrentan desafíos significativos. La fortaleza del colón hace que los productos importados sean más accesibles para los consumidores, poniendo en desventaja a los productos nacionales y amenazando la viabilidad de estas empresas.

Para que el Estado se convierta en un catalizador del éxito productivo, es imperativo que se someta a una reforma integral y profunda. Esta transformación debe estar centrada en la digitalización y la eficiencia, elementos clave para la modernización de la administración pública y la agilización de los procesos vinculados a las actividades productivas. La digitalización no solo simplifica los trámites y reduce los tiempos de espera, sino que también promueve la transparencia y la rendición de cuentas, aspectos fundamentales para la confianza empresarial y la inversión. Además, la optimización del gasto estatal es crucial para la sostenibilidad fiscal. Esto no implica únicamente una reducción del gasto, sino una reevaluación de cómo y en qué se invierten los recursos públicos. La eficiencia en el gasto debe ir de la mano con la calidad y la efectividad de los servicios ofrecidos, asegurando que cada colón invertido contribuya al bienestar colectivo y al fortalecimiento del tejido productivo.

Una política económica responsable debe priorizar el equilibrio del sistema económico, superando los enfoques tradicionales que a

menudo se quedan cortos ante la complejidad de la realidad actual. Debe favorecer la calidad de vida de las mayorías, sin comprometer la viabilidad de las actividades y empresas que generan riqueza. Esto requiere un enfoque holístico que integre la política social con la económica, reconociendo que el desarrollo sostenible depende de la armonía entre ambos. El Estado debe adoptar estándares de competitividad que reflejen las exigencias de un mundo globalizado e interconectado. Esto significa no solo estar a la par con las prácticas internacionales, sino también ser proactivo en la adopción de innovaciones que puedan posicionar al país como líder en ciertos sectores. La competitividad debe entenderse en un sentido amplio, incluyendo la calidad de la educación, la infraestructura, el marco regulatorio y la capacidad de adaptación a los cambios del mercado global.

EL GALLITO

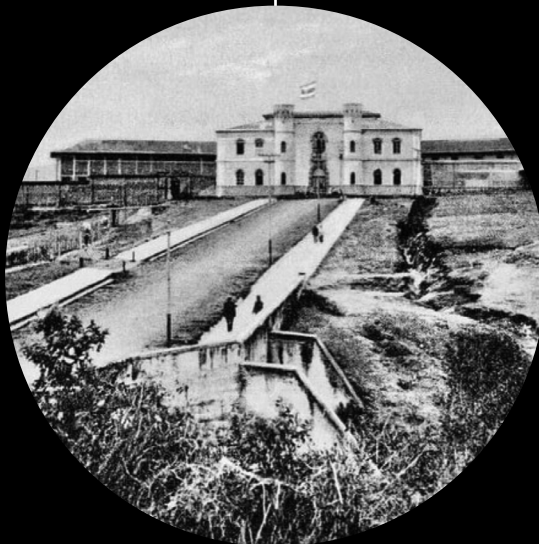


***La Violencia en la Costa Rica del Siglo XXI:
Nuevas Manifestaciones,
Causas y Posibles Soluciones***

163

“

El flagelo de la violencia se ha transformado en una amenaza constante a la estabilidad y la paz de los costarricenses, de ahí la necesidad y urgencia de establecer políticas públicas preventivas de la violencia, que combinen los elementos represivos con aquellos otros promotores del bienestar social, la educación y la cultura.



La concepción de la violencia en el contexto costarricense ha sido objeto de múltiples interpretaciones, algunas de las cuales tienden a idealizar retrospectivamente una supuesta era de paz ininterrumpida. Sin embargo, un análisis riguroso de la historia revela que la violencia ha permeado la sociedad en diversas formas y en distintos momentos clave.

Durante el siglo XIX, por ejemplo, se registraron episodios de violencia política significativa, incluyendo golpes de estado y ejecuciones sumarias de mandatarios. En el albor del siglo XX, el régimen de Federico Tinoco Granados se caracterizó por su naturaleza autoritaria y represiva, culminando en la Guerra Civil de 1948, un conflicto que, aunque breve, dejó una huella indeleble en la memoria colectiva del país.

Es preciso reconocer que la violencia doméstica, particularmente contra mujeres y niños, era una realidad socialmente tolerada y legalmente invisibilizada hasta bien entrado el siglo XX. Estas manifestaciones de violencia, aunque cotidianas, no deben ser minimizadas ni consideradas como meras anécdotas del pasado, sino entendidas como indicadores

de las dinámicas de poder y control social imperantes.



*Fernando Cruz Castro,
Abogado, Ex – presidente
de la Corte Suprema de
Justicia*

El Derecho Penal debería llamarse Derecho del dolor, porque cuando uno impone una pena, está administrando dolor, y esa administración debe ser cuidadosa, prudente y en una dosis adecuada, no está administrando rehabilitación ni contribuyendo a la dignidad del ser humano.

Contrario a la noción de una cultura de paz perpetua, lo que se observa es un patrón de valoración de la estabilidad social, donde la violencia, aunque presente, rara vez ha escalado hasta el punto de desestabilizar las estructuras del Estado.

Esta tendencia histórica hacia la preservación del orden social se ha visto reflejada en la implementación de medidas legales y coercitivas orientadas a la mitigación de la violencia. Ejemplos notables incluyen la abolición de la pena de muerte bajo el gobierno de Tomás Guardia y la disolución del ejército en 1949, lo que evidencia un esfuerzo sostenido por parte de las autoridades gubernamentales para confrontar

y limitar las expresiones de violencia. En la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica experimentó un período de relativa tranquilidad, caracterizado por una disminución en la incidencia de crímenes y otros actos de violencia con potencial desestabilizador.

Este fenómeno puede atribuirse, en parte, a la

consolidación de un marco jurídico robusto y a la promoción de una cultura de resolución pacífica de conflictos, lo que ha contribuido a la percepción internacional de Costa Rica como un oasis de paz en una región frecuentemente azotada por la turbulencia política y social.

La actualidad costarricense se ve marcada por la emergencia de una violencia de naturaleza supranacional, un fenómeno que distorsiona la percepción tradicional de seguridad ciudadana. Este nuevo paradigma delictivo, caracterizado por su visibilidad y alcance transfronterizo, es el resultado de la operación de organizaciones criminales que desafían la soberanía nacional y la integridad de las instituciones estatales.

La globalización ha facilitado la expansión de estas redes delictivas, permitiéndoles operar con una lógica que trasciende las barreras geográficas y jurídicas, infiltrándose en los estratos más profundos de las sociedades. Estas entidades criminales, armadas con recursos y estrategias que superan a menudo las capacidades de respuesta locales, dejan una estela de violencia que no solo se manifiesta en actos de agresión física, sino también en la corrupción sistémica y la instauración del miedo como mecanismo de control. La influencia corrosiva de estas organizaciones debilita los lazos comunitarios y socava las bases de la economía y la política, generando un impacto negativo en la cohesión social y la gobernabilidad democrática. La violencia supranacional, por lo tanto, no solo representa un desafío para la seguridad pública, sino que también plantea una amenaza existencial para el tejido social y la calidad de vida de los

ciudadanos.

La posición geográfica de Costa Rica, situada estratégicamente entre las naciones productoras de drogas ilícitas y los grandes mercados consumidores, constituye un factor determinante en la dinámica del crimen organizado transnacional. Esta realidad geoeconómica, combinada con la integración de Costa Rica en la economía global, facilita el tránsito de sustancias prohibidas, principalmente hacia los Estados Unidos y Europa. El intenso flujo comercial que caracteriza a las relaciones de Costa Rica con estas regiones proporciona oportunidades para que las organizaciones criminales infiltren sus operaciones ilícitas, utilizando infraestructuras clave como los puertos marítimos. La apertura económica y la liberalización del comercio, si bien han traído beneficios significativos en términos de crecimiento y desarrollo, también han expuesto al país a vulnerabilidades específicas. Los puertos costarricenses, vitales para el intercambio de bienes legítimos, se convierten así en puntos focales para la actividad delictiva, donde la vigilancia y el control se ven desafiados por la sofisticación y el poderío de las redes delictivas. El desafío que enfrenta Costa Rica no es único en la región, pero su impacto se ve amplificado por la ausencia de un aparato militar y la dependencia de un cuerpo policial que, aunque comprometido con la seguridad ciudadana, debe lidiar con limitaciones en recursos y alcance frente a adversarios de naturaleza global.

La problemática del narcotráfico en Costa Rica no se limita a su papel como puente geográfico

en el tráfico internacional de drogas; el país enfrenta también el desafío de un creciente mercado interno. Este fenómeno no solo incrementa la disponibilidad y el consumo de sustancias ilícitas, sino que también alimenta ciclos de violencia y criminalidad a nivel local. La demanda interna de drogas recreativas ilegales es un motor que impulsa la operación y expansión de redes criminales dentro del territorio nacional, las cuales no solo se dedican a la distribución de narcóticos, sino que también participan en actividades conexas como el lavado de dinero, la extorsión y el tráfico de armas. Este mercado interno, robustecido por factores socioeconómicos y culturales, representa un desafío adicional para las autoridades, que deben combatir no solo la violencia y corrupción derivadas del crimen organizado transnacional, sino también las dinámicas delictivas que, derivadas de este, se gestan y desarrollan internamente. La lucha contra este mercado interno es compleja, pues requiere abordar las causas profundas que llevan a individuos y comunidades a involucrarse en el consumo y comercio de drogas. Además, es fundamental fortalecer el sistema de justicia penal y las capacidades de las fuerzas de seguridad para dismantelar las estructuras criminales que se benefician de este mercado. Solo así, mediante un enfoque holístico y multifacético, Costa Rica podrá avanzar hacia la reducción de la violencia y la consolidación de una sociedad más segura y justa.

La configuración de una política pública eficaz en materia de seguridad requiere de un proceso

inclusivo y participativo que trascienda el ámbito político partidista. Es imperativo instaurar un diálogo nacional que convoque a una diversidad de actores, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas, grupos de expertos en criminología y ciencias jurídicas, así como a países cooperantes y organizaciones de integración regional. Este enfoque colaborativo permite la amalgama de perspectivas y la generación de un debate enriquecedor que contribuye a la construcción de una opinión pública informada y crítica. La participación activa de la sociedad civil es fundamental para asegurar que las políticas de seguridad reflejen las necesidades y expectativas de la ciudadanía, promoviendo así la legitimidad y la eficacia de las medidas adoptadas. La cooperación internacional, por su parte, ofrece la oportunidad de compartir experiencias, recursos y estrategias que han demostrado ser exitosas en otros contextos, adaptándolas a la realidad costarricense. Las organizaciones de integración desempeñan un rol crucial en la armonización de esfuerzos y en la promoción de una visión de seguridad que considere las interdependencias y desafíos compartidos a nivel regional y global. Un diálogo nacional bien estructurado y continuo es la piedra angular para el diseño de una política pública que no solo aborde los síntomas de la inseguridad, sino que también se enfoque en las causas estructurales del problema. Solo mediante la suma de voluntades y la convergencia de saberes será posible articular una respuesta integral y sostenible a los desafíos de seguridad que enfrenta Costa Rica en el complejo escenario actual.





PALABRAS FINALES: **EL FUTURO**



He llegado al final de este libro, y lo primero que debo expresar es un profundo y sincero agradecimiento a los más de seiscientos costarricenses participantes en el Programa Costa Rica: Reto Siglo XXI.

Durante tres años de trabajo ininterrumpido esos costarricenses me hicieron el honor de sostener con este servidor amenas, sinceras, dinámicas y profundas conversaciones sobre los más importantes temas del desarrollo nacional.

Luego de lo mucho dialogado puedo decir que mis contertulios coinciden en lo siguiente: la sociedad nacional y desarrollada del futuro debe caracterizarse por un Estado eficiente y de excelencia, un sistema productivo de alto nivel de competitividad e integración en las grandes corrientes de la economía planetaria; un sistema económico socialmente inclusivo cuyo crecimiento productivo vaya de la mano con la participación de todos los actores sociales y económicos en el disfrute de la riqueza social; cuya evolución se fundamente en el respeto irrestricto al Estado Constitucional de Derecho, los derechos humanos, el régimen de libertades, el medio ambiente y el desarrollo ecológico.

Costa Rica aún puede dar mucho más de sí misma, los mayores éxitos esperan el arribo de nuestro pueblo.

*Los mejores tiempos de la historia
costarricense están por llegar.
Nuestra patria aún se encuentra muy lejos
de llegar a su final.*



Reto Siglo 21

Por: Jorge Woodbridge González



GLOSARIO FOTOGRAFICO

*Notas e Historia
de las Fotografías*

Portada y Contraportada: "Salón Dorado" del Museo de Arte Costarricense. Mural en bajorrelieve en estuco, pintado en color bronce, del escultor y orfebre francés Louis Féron entre los años 1939 y 1940.

Página 2. Amando Céspedes Marín, el genio tico considerado el padre de la radio nacional

Página 14. San José 1890.

Página 18. Poás de Alajuela en el año 1961.

Página 20. Abolición del Ejército.

Página 20. Guerra Civil, 1948.

Página 21. Manuel Mora, Monsenor Victor Manuel Sanabria, Luis Demetrio Tinoco, Teodoro Picado Michalski y Rafael Angel Calderón Guardia, celebran la promulgación del Código de Trabajo. 15 de Septiembre de 1943.

Página 24. Costa Rica, zona Atlántica, fotografía de H. N. Rudd - Siglo 20.

Página 30. Estudiantes de último año de la primera graduación del Liceo de Costa Rica, 1893.

Página 35. Antigua Universidad de Costa Rica en Gonzalez Lahmann.

Página 38. Universidad de Costa Rica edificio de estudio generales década de 1970.

Página 46. La corta visita del 35 presidente de los Estados Unidos, John F Kennedy a Costa Rica, 1963. El presidente Kennedy es recibido por el presidente costarricense, Francisco Orlich, a su llegada.

Página 52. Discurso de Uladislao Gámez en el acto de Abolición del Ejército, 1948, Cuartel Bellavista.

Página 58. Recolectoras de Café, 1940.

Página 66. Construcción del Instituto Costarricense de Electricidad en la Sabana, frente al antiguo aeropuerto, 1966-1968.

Página 72. La presencia de los niños en el mercado evidencia el aporte infantil en la economía del Siglo 20.

Página 78. La Botica Española, 1917.

Página 86. Repartidor de Leche, 1950. Fotografía de Manuel Gómez Miralles.

Página 92. Central de teléfonos de San José, Pasaje Jiménez, 1930.

Página 97. El Gallito en su primer establecimiento, calle 8, avenida central y primera, 1913. Fotografía de Manuel Gómez Miralles.

Página 100. La antigua Penitenciaría Central, 1918. Actual Museo de los Niños.

Este es el primer libro de la Colección Costa Rica: Reto Siglo XXI, donde Jorge Woodbridge resume e interpreta las ideas principales expresadas por más de seiscientos costarricenses que, en los últimos tres años, sostuvieron conversaciones con él en el marco del programa "Costa Rica: Reto Siglo 21".

Quienes deseen conocer a los participantes y escuchar esas conversaciones pueden visitar el sitio web www.retosiglo21.org donde también se brinda información sobre esta importante iniciativa de ciudadanos comprometidos con la libertad, la democracia y el desarrollo humano integral.

JORGE WOODBRIDGE GONZÁLEZ

Jorge Woodbridge González es ingeniero químico por la Universidad de Costa Rica, con estudios en Incae Business School y Ipade.

Fue director del ICT, viceministro de Economía (2006-2008) y ministro de Competitividad (2008-2010).

Es asesor financiero, fundador del Banco de Fomento Agrícola y profesor en la UCR. Ha dirigido diversas empresas y asociaciones, y es autor de varios libros sobre economía y sociedad.

COSTA RICA:
**RETO
SIGLO
21**

ISBN: 978-0988-03-856-0



9 789968 038560

